



Editorial

Un plan para mitigar la crisis tras el cierre de Huachipato

La decisión del Grupo CAP de suspender de manera indefinida las operaciones de la Siderúrgica Huachipato en septiembre próximo puso las alertas en toda la industria regional respecto a los cambios que pueda vivir el desarrollo productivo y el impacto que puede sufrir el empleo de los cientos de habitantes del Biobío.

Por esta razón, grandes expectativas están puestas en el plan que llevará adelante el Gobierno para mitigar los efectos del cierre de más de 20 mil puestos de empleos indirectos en los próximos dos meses.

Esta situación se abordó tanto la semana pasada con los sindicatos de la empresa como durante esta semana en una reunión que sostuvo el ministro de Economía Nicolás Grau con representantes de las compañías contratistas que alcanzan los 2.300 según estimaciones de la siderúrgica, instando a avanzar en la vinculación con otras empresas en el más corto plazo posible, con el fin de "romper la cadena y hacer que no se nos genere un efecto dominó".

El jueves el subsecretario del Trabajo Giorgio Boccardo también se reunió con los sindicatos y representantes gremiales en visita a Concepción, para exponer las implicancias del plan que se anunciará en las próximas semanas, y que adelantó en una entrevista que "contempla evitar que todos los proveedores que dependían de los servicios que prestan a la empresa entren en alguna situación de cese de funciones", y anticipó que "es clave entregar herramientas que permitan a la Región recuperar capacidades productivas y que estas sean industriales".

En dichos esfuerzos resultará clave que el plan que diseña el Ejecutivo, encabezado por las carteras de Economía y Trabajo, comprenda la dimensión real del impacto que tendrá el cierre de la industria del acero, el nivel de especialización de cada uno de los trabajadores afectados, y tenga sobre la mesa las experiencias anteriores de reconversión laboral que ha tenido la Región, que no han resultado del todo como se esperaba. En un reportaje de EL SUR se mostró los contrastes que hay entre experiencias como lo ocurrido con los extrabajadores de Enel y Fanalzo, donde incluso los dirigentes acusan incumplimientos a más de un año del cierre de las operaciones tanto en Coronel como Penco. Esto, sin mencionar lo sucedido hace tres décadas con el cierre de las minas a carbón.

Otra de las expectativas de los gremios productivos está pues-

ta en las alternativas para acelerar la inversión a nivel local para fortalecer la industria y generar nuevas fuentes de trabajo, cuestión que se abordó en el encuentro Impulsa de la Cámara de Producción y Comercio (CPC) Biobío, donde se conoció que proyectos vinculados al rubro de la energía eólica por \$1.625 millones están esperando su tramitación u otros como el de tierras raras que se impulsa en Penco por parte de la empresa Aclara. Es en ese punto donde resulta fundamental equilibrar la necesidad de generar nuevas fuentes de trabajo con el cuidado medioambiental de la Región y la permisología que según estimaciones de distintos sectores retrasa en promedio en tres años la tramitación de un proyecto en el Biobío.

Un tercer elemento donde también se han generado incipientes esfuerzos radica en el rol que pueden jugar las empresas estatales con presencia en la zona, las cuales fueron convocadas por

la Delegación Presidencial a fines de esta semana con el objetivo de encontrar alternativas que permitan generar nuevas fuentes de empleo y una mayor dinamización de la economía regional: en ese punto, representantes de ENAP, Asmar, EFE Sur y Puertos de Talcahuano pusieron sus apuestas en los proyectos que actualmente se están desarrollando y los que se planifica en el mediano plazo se puedan desarrollar, varios de ellos en etapas iniciales de diseño

o ingeniería de detalles.

Todos estos esfuerzos van en línea con el trabajo iniciado hace algunos meses por la Mesa de Defensa al Empleo y la Industria Regional, donde confluyen representantes de las empresas, de sindicatos, y autoridades tanto del Gobierno Regional como del nivel central.

Su presidente Iván Montes expuso que "hubo una época en la Región donde se tomaron decisiones a largo plazo, y recién en los dos últimos años hemos llegado a un acuerdo entre todos los actores de que es necesario ponerse de acuerdo en un proyecto de desarrollo estratégico".

Con una Estrategia Regional de Desarrollo actualizada, un Plan Regulador Metropolitano en proceso de modernización y planes en marcha para nueva infraestructura con proyectos como la ruta Pie de Monte o la conexión ferroviaria con Santiago, es esencial marcar una hoja de ruta con fechas claras y objetivos establecidos para mitigar los efectos que pueda tener un cierre de similares condiciones al que se vivirá en las próximas semanas en Talcahuano.

Resultará clave que el plan que diseña el Ejecutivo, encabezado por las carteras de Economía y Trabajo, comprenda la dimensión real del impacto que tendrá el cierre de la industria del acero y otras características de dichos empleos.